

JUICIO DE INCONFORMIDAD.**EXPEDIENTE:** JI/105/2017.**ACTOR:** PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.**AUTORIDAD RESPONSABLE:**
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
No. 08, CON SEDE EN ECATEPEC DE
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.**TERCERO INTERESADO:** NO
COMPARECIO.**MAGISTRADO PONENTE:** DR. EN D.
CRESCENCIO VALENCIA JUÁREZ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio de inconformidad al rubro citado, promovido por **Patricia Vargas Martínez**, quien se ostenta con el carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante la autoridad señalada como responsable, mediante el cual impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Gobernador, por nulidad de la votación recibida en diversas casillas, correspondientes al Distrito Electoral número 08, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México; y

RESULTANDO

I. JORNADA ELECTORAL. El cuatro de junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la elección para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete al quince de septiembre de dos mil

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

veintitrés.

II. CÓMPUTO DISTRITAL. El siete de junio siguiente, el Consejo Distrital Electoral Numero 08, señalado como responsable en el presente juicio de inconformidad, realizó el cómputo distrital de la elección de Gobernador, correspondiente al Distrito en cita, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, mismo que arrojó como votación final de los candidatos los resultados siguientes:

PARTIDO POLÍTICO/COALICIÓN	VOTACIÓN (NÚMERO)	VOTACIÓN (LETRA)
	10948	DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
	32636	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
	19894	DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
	916	NOVECIENTOS DIECISÉIS
morena	46234	CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
TERESA CASTELL	3028	TRES MIL VEINTIOCHO
NO REGISTRADOS	109	CIENTO NUEVE
NULOS	3550	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA
TOTAL	117315	CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE

Al finalizar el cómputo, el propio Consejo Distrital fijó en el exterior de su sede los resultados de la elección, integró el expediente del cómputo distrital de la elección de Gobernador con las actas de las casillas, el original del acta del cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del Presidente del Consejo Distrital Electoral número 08, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, sobre el

desarrollo del proceso electoral.

III. PRESENTACIÓN DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD. El doce de junio del año en curso, el Partido de la Revolución Democrática promovió juicio de inconformidad por conducto de Patricia Vargas Martínez, quien se ostentó con el carácter de representante propietaria del mismo, ante la autoridad señalada como responsable, para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, por nulidad de la votación recibida en las casillas que menciona en el escrito de demanda.

IV. TRÁMITE ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La autoridad señalada como responsable, procedió a hacer del conocimiento público en la forma y términos de ley, la presentación del medio de impugnación cuyo estudio nos ocupa para efecto de que comparecieran terceros interesados o coadyuvantes, en su caso. En el presente medio de impugnación no compareció tercero interesado.

V. REMISIÓN DE CONSTANCIAS AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. El diecisiete de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio número IEEM/CDD08/0191/2017, con el que la autoridad responsable remitió el expediente administrativo formado con motivo de la promoción del presente juicio, acompañando el informe circunstanciado a que hace alusión el artículo 422, fracción V del Código Electoral Local, exponiendo los motivos que consideró pertinentes para sostener la legalidad de su actuación.

VI. REGISTRO, RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA. Por acuerdo del Magistrado Presidente, emitido el veintiuno de junio del año en curso, se ordenó radicar el medio de impugnación, formar por duplicado el expediente correspondiente bajo el número **JI/105/2017** y, por razón de turno, fue designado ponente



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO.

el Magistrado Doctor en Derecho Crescencio Valencia Juárez, para su resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 8, 383, 389, 390, fracción II, 391, 401, 402, 404, 405, 406, fracción III, 408, fracción III, inciso a) numeral 1, 410, párrafo segundo, 425, párrafo cuarto, 442, 446, 453 del Código Electoral del Estado de México; así como 1, 2, 5, 14, 17, 19, fracción I, y 64, primer párrafo del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México. Lo anterior, por tratarse de un juicio de inconformidad mediante el cual se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Gobernador, por nulidad de la votación recibida en las casillas que corresponden al distrito número 8, con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

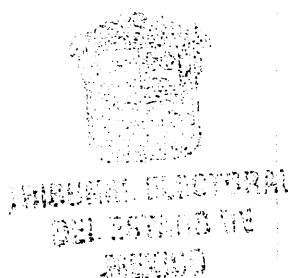
SEGUNDO. Improcedencia. Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las causales de improcedencia, en virtud de que éstas se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución del proceso y además por ser cuestiones de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Código Electoral del Estado de México, este Tribunal Electoral debe analizarlas en forma previa al estudio de fondo de la cuestión planteada en el presente asunto, toda vez, que de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en los artículos 426 y 427 del ordenamiento en cita, deviene la imposibilidad de este órgano jurisdiccional para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la controversia planteada.

En efecto, en términos de lo dispuesto en los artículos 1º, fracción VI, 425, párrafo cuarto, y 426 del Código Electoral del Estado de México, las causales de improcedencia de los juicios en la materia son de orden público, por lo que su estudio debe ser oficioso, y en cualquier momento durante la sustanciación del medio de impugnación, a fin de verificar el pleno cumplimiento de los presupuestos procesales necesarios para que el juzgador pueda emitir una decisión de fondo sobre el litigio en cuestión, sin los cuales, éste se encuentra impedido para generar, modificar o restringir derechos y obligaciones mediante el dictado de una sentencia.

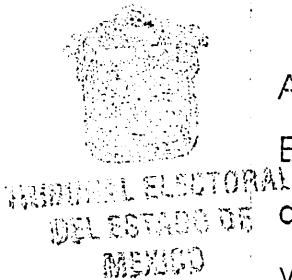
Lo anterior, en razón de que el derecho de acceso a la justicia, previsto en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución federal; 8º, párrafo 1, y 25, párrafos 1 y 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 2º, párrafo 3, y 14, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se debe ajustar a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional.

En consecuencia, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, la autoridad jurisdiccional debe asegurarse de que el medio de impugnación sea procedente, en cualquier momento.

En ese orden de ideas, este Tribunal Electoral considera que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 426, fracción III del Código Electoral del Estado de México, en virtud de que el escrito de demanda fue presentado por quien **carece de personería**; por lo que, procede su desechamiento de plano con fundamento en el primer párrafo del propio artículo 426 del Código de la materia.



Al respecto, es oportuno señalar que uno de los presupuestos indispensables para la integración válida de la relación jurídica procesal en los medios de impugnación jurisdiccionales, es la existencia y vinculación al proceso de los sujetos que constituyen las partes del litigio sometido al conocimiento y decisión del tribunal, como es el que ordinariamente se le identifica como actor, promovente, demandante, quejoso o impugnante, quien pretende en nombre propio o en representación y nombre de otra persona, la decisión del conflicto mediante una resolución imperativa; por lo que la personalidad de las partes en el ejercicio de cualquier derecho, al igual que el de autoridad competente, son presupuestos procesales fundamentales para dirimir cualquier conflicto, cuyo estudio, obliga, necesaria e indispensablemente a realizarse aún de oficio, por la autoridad facultada por la ley para tal efecto.




A efecto de establecer válidamente el vínculo procesal, el Código Electoral local, prevé que, cuando algún sujeto ejercite el derecho de acción mediante la presentación de una demanda, en nombre y representación de otra persona, junto con su ocuro, deberá acreditar la personería con que se ostente, pues de esta manera es posible imputar los efectos jurídicos atinentes al individuo o ente representado que, al final, debe estar legitimado para accionar al órgano jurisdiccional y obtener una resolución de fondo.

Esto es, las personas morales, en este caso los partidos políticos, actúan a través de las personas físicas que ostentan la facultad para representar a los mismos, y es necesario seguir las reglas conforme a las cuales se da a conocer públicamente quién o quiénes son aquellos que ostentan esa facultad, de esa manera se puede tener certeza de que los actos de esas personas físicas pueden constreñir al ente en su calidad de sujeto de Derecho.

De otro modo, un partido político se podría deslindar de obligaciones o aprovechar los beneficios de un acto jurídico a voluntad, negando o aceptando discrecionalmente una supuesta representación de facto en razón de lo que más le convenga.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 4/2004 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro **“CANDIDATOS. LA APTITUD PARA INTERPONER RECURSOS LOCALES, NO LOS LEGITIMA PARA LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN REPRESENTACIÓN DE SU PARTIDO”**; en el que se determinó que el candidato no podía actuar en representación del partido político, al no acreditar tal situación, aun cuando en la instancia local tuviera personalidad para impugnar por su propio derecho.

Asimismo, tomando en cuenta que, la **personería** es la capacidad de representación o lo que se conoce en derecho procesal como Legitimación en el Proceso [*Legitimación ad procesum*].



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Esta figura jurídica se identifica con la falta de personalidad o capacidad en el actor, misma que se encuentra referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero.

Así, la **personería** se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, **para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra**, por lo que si no se acredita tener **personería** —como lo exige el artículo en cita—, impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio: es decir, el análisis de dicho requisito procesal es examinado oficiosamente por el Juez o, bien, opuesto como excepción por el demandado, al considerarse ésta una excepción dilatoria que no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que retarda su curso y, además, de previo y especial pronunciamiento,

que puede resolverse en cualquier momento, sea durante el procedimiento o en la sentencia.

De este modo, la falta de personería tiene como consecuencia, el desechamiento de plano de la demanda, tal y como lo indica el párrafo primero del artículo 426 en cita, que dispone:

Artículo 426. Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y serán desechados de plano, cuando:

III) Sean promovidos por quien carezca de personería.

En este contexto, el artículo 411, párrafo primero, fracción I del Código Electoral del Estado de México, que establece que son parte en el procedimiento **el actor**, que será el ciudadano, organización de ciudadanos, candidato independiente, **partido político** o coalición que interponga el medio impugnativo estando legitimado, lo presente por sí mismo o, en su caso, a través de representante, en los términos de este ordenamiento; asimismo, el artículo 412, párrafo primero, fracción I del citado ordenamiento legal, que indica: La presentación de los medios de impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus **representantes legítimos**, entendiéndose por éstos, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado; en este caso, solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados.

De igual forma, el artículo 23, numeral 1, inciso j), de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que es derecho de los partidos políticos nombrar representantes ante los órganos del Instituto [Nacional Electoral] o de los Organismos Públicos Locales, en los términos de la Constitución, las constituciones locales y demás legislación aplicable.

En ese tenor, el artículo 227 del Código Electoral del Estado de México, dispone:



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

“Artículo 227. Los partidos políticos deberán acreditar a sus representantes ante los órganos electorales dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del Consejo del que se trate o, en su caso, de la sesión del Consejo General en que se apruebe su registro.

Vencido este plazo, los partidos políticos que no hayan acreditado a sus representantes no formarán parte del Consejo del que se trate durante el proceso electoral.

Los órganos directivos estatales de los partidos políticos podrán sustituir en cualquier tiempo a sus representantes en los órganos electorales dando aviso por escrito al Presidente del Consejo respectivo.

Los candidatos independientes deberán acreditar representantes ante los órganos electorales del Instituto una vez que se han registrados.”

Por consiguiente, de la lectura del párrafo tercero del artículo transcrito, se considera que órganos directivos estatales de los partidos políticos son quienes podrán sustituir en cualquier tiempo a sus representantes ante los órganos electorales, siempre y cuando, se dé aviso al Presidente del Consejo correspondiente.

Razón por la cual, de una **interpretación funcional** del texto normativo en comento, este Tribunal arriba a la conclusión de que si sólo son los Órganos Directivos Estatales de los partidos son quienes pueden sustituir a los representantes previamente registrados, lo que de suyo implica por mayoría de razón, que también son solo ellos quienes pueden realizar tal nombramiento, puesto que conforme a la legislación aplicable en tal designación no se establece en favor de ningún otro órgano interno del partido; por lo que en lo que aquí interesa, se destaca que lo realmente trascendente, es que la facultad para ello corre a cargo de la dirigencia partidista, mas no así del representante partidista ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

En relatadas condiciones, la exigencia de acreditar la personería dentro de los medios de impugnación que prevé el Código Electoral del Estado de México, se encuentra satisfecha si el escrito de demanda respectivo se encuentra firmado por la persona que tiene las facultades de comparecer en nombre de



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

otro, en materia electoral, entre otros, los representantes de los partidos políticos ante los órganos administrativos electorales ya sean, centrales o desconcentrados, mismos que conforme con lo sustentando con antelación, deberán ser nombrados por la autoridad partidaria con las atribuciones suficientes para delegar tal representación en términos de los Estatutos de cada instituto político, y estos a su vez, acompañen el escrito que acredite tal circunstancia.

Con base en lo anterior, los artículos 76 inciso k) y 103, inciso k) de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se desprende que:

Artículo 76. *Son funciones del Comité Ejecutivo Estatal las siguientes:*

[...]

k) *Nombrar a los **representantes** del Partido ante el **órgano electoral estatal** y las dependencias de éste;*

[...]

Artículo 103. *Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes:*

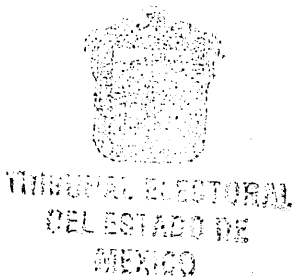
[...]

k) *Ratificar a los titulares de las Representaciones del Partido ante los Órganos Locales Electorales nombrados por los Comités Ejecutivos Estatales o en su caso nombrar a los **representantes** del Partido ante los **Órganos Electorales Locales** cuando algún Comité Ejecutivo Estatal no lo haya hecho oportunamente o el nombrado no cumpla con sus funciones;*

[...]

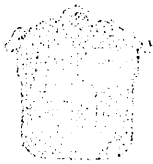
Así, de una interpretación sistemática entre los artículos 227 párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México y 76 inciso k) y 103 inciso k) de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se desprende que los órganos directivos que pueden realizar el nombramiento y sustitución de los representantes de dicho instituto político ante los órganos electorales nacionales o locales son:

- 1) Comité Ejecutivo Estatal.
- 2) Comité Ejecutivo Nacional.



Puesto que ellos, ostentan el cargo de dirección a que hace referencia el artículo 227 párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, transcrito en párrafos anteriores.

En relatadas condiciones, si se tiene que quien nombró al representante del instituto político actor, según se aprecia a fojas 31 y 32 del sumario, fue **Javier Rivera Escalona**, quien es el Representante Propietario del partido político actor, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México; y dicha persona carece de las facultades legales y estatutarias para designar a los representantes de dicho instituto político ante los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, es decir, ante la autoridad señalada como responsable; por tanto, es evidente que la acreditación otorgada en favor de la signante del presente medio de impugnación, carece de validez legal y estatutaria para los efectos de representar en juicio al Partido de la Revolución Democrática.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Aunado a lo anterior, del requerimiento generado por este órgano jurisdiccional al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en el expediente JI/1/2017, que se cita como un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del Código Electoral local, a efecto de allegarse de mayores elementos para resolver, con la finalidad de que informara a este órgano jurisdiccional, si en sus archivos contaba con documentación presentada por el Partido de la Revolución Democrática, adicional a los nombramientos, a efecto de acreditar a sus representantes ante los Consejos Distritales Electorales en los que se divide esta entidad federativa, así como cualquier otro elemento que estime pertinente a fin de dar cumplimiento con el referido requerimiento.

Derivado de dicha actuación, mediante oficio IEEM/SE/6871/2017 el Secretario del Consejo General del Instituto Electoral local, remitió diversa documentación de la que se desprende copia certificada del escrito PRESIDENCIA/EM/752/2016 del cual se

advierte que el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, licenciado Omar Ortega Álvarez, instruyó a Javier Rivera Escalona a efecto de que realizara las acreditaciones de los ciudadanos que se mencionan en el listado que obra a fojas de la 3 a la 6, ante los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral del Estado de México, asimismo de dichas actuaciones se desprende que en el Distrito Electoral 08, fueron acreditados como representantes propietario y suplente **Alejandro Dávila Jiménez y Norma Gabriela Gutierrez Rivera**, respectivamente.

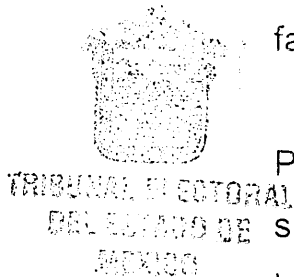
Ahora bien, de la acreditación signada por el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral local, a favor de **Patricia Vargas Martínez** como representante propietaria del citado partido político, no obra en el sumario constancia alguna que faculte a Javier Rivera Escalona para realizar dicha sustitución.

Por tanto, es evidente que la acreditación otorgada en favor de la signante del presente medio de impugnación, carece de validez legal y estatutaria para los efectos de representar en juicio al Partido de la Revolución Democrática.

Robustece el criterio asumido por este Tribunal, lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Reconsideración **SUP-REC-1096/2015 Y SUP-REC-1097/2015, ACUMULADOS**, asunto relacionado con los pasados comicios municipales celebrados en esta entidad, en el que se lee:

“El representante de MORENA ante el Consejo General del Instituto local podía comunicar los cambios en la representación del partido ante los consejos municipales.

En otra línea argumentativa, el recurrente sostiene que a pesar de que "existe documento expedido en fecha 9 de junio del año en curso por el suscrito LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS, en su calidad de representante propietario ante el Consejo General del Instituto [...] también es cierto que dicho documento no se le puede dar valor probatorio pleno [...] ya que el mismo es suscrito por persona que no



tiene facultades estatutarias para designar a representantes ante los consejos municipales". Sostiene que conforme al artículo 32, inciso a) de los estatutos del partido es el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y en su caso, los presidentes de los comités directivos estatales y municipales son quienes deben realizar la designación de representantes.

Asimismo, se duele que de conformidad con el artículo 227, tercer párrafo del Código Electoral del Estado de México, establece que los órganos directivos estatales de los partidos políticos son quienes podrán sustituir en cualquier tiempo a sus representantes en los órganos electorales, dado aviso por escrito al Presidente del Consejo respectivo, por lo que si en la especie la sustitución la realizó el representante del partido ante el citado Consejo General, dicha sustitución es inválida.

Sobre dicho agravio, debe considerarse que si bien, de acuerdo con el artículo 227, tercer párrafo del Código local, corresponde a los órganos directivos del partido realizar las sustituciones, y que de conformidad con el artículo 14 bis, incisos C y D, y 32 inciso a) de los Estatutos de MORENA son órganos de dirección los Congresos Estatales y órganos de Ejecución, los Comités Ejecutivos Estatales, y que el presidente del comité ejecutivo estatal ostenta la representación del Partido en el Estado, lo cierto es que en el caso, tampoco dicho agravio lleva a demostrar que Juan Rafael Laguna Hernández ostentaba la representación de MORENA al momento de promover el juicio de inconformidad.

Por un lado, debe señalarse que el representante ante el Consejo General, en los escritos referidos, no hace la designación propiamente dicha, sino que comunica, a nombre de MORENA, los cambios. Por lo cual es posible inferir, que Luis Daniel Serrano Palacios si ostenta la representación del partido ante dicho consejo, sí tiene facultades para hacer ese tipo de comunicaciones.

Por otro lado, se advierte que el partido político recurrente al momento de presentar la demanda de juicio de inconformidad, únicamente ofreció como prueba de su personería el oficio de cinco de junio, signada por Luis Daniel Serrano Palacios, ostentándose como representante propietario de MORENA ante el Consejo General de dicho instituto, en virtud del cual comunica al Director de Partidos Políticos, el cambio de representante suplente de MORENA ante el Consejo Municipal Electoral 122 con sede en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, a favor Juan Rafael Laguna Hernández como representante suplente.

De igual forma, la constancia con la que pretenden acreditar que el veinticinco de junio cambió nuevamente a su favor la representación, también está signada por el mismo Luis Daniel Serrano Palacios, quien se ostentándose con el mismo carácter de representante del partido ante el Consejo General del Instituto local.

Por lo que si en efecto dicho representante ante el Consejo General del Instituto local, no tenía facultades para sustituirlo, tampoco tenía facultades para nombrarlo en primer término en el escrito de cinco de junio, ni posteriormente para cambiarlo en el del día veinticinco siguiente. De tal suerte que se llegaría a la conclusión de que para presentar el juicio de inconformidad el citado ciudadano tampoco tenía acreditada la personería, por lo que el agravio al final debe desestimarse.

Lo anterior es así, máxime que MORENA no ofrece prueba o documento, ni al presentar el juicio de inconformidad, ni en el presente recurso de reconsideración en virtud del cual conste el nombramiento de Juan Rafael Laguna Hernández realizado por el Congreso Estatal, el Comité Ejecutivo Estatal o su Presidente del Partido Morena en el Estado de México, por el que se haya designado como representante



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

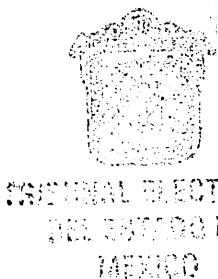
ante el Consejo Municipal Electoral de Valle de Chalco, ni tampoco ofrece prueba de la comunicación de dicho nombramiento en específico al Presidente del Consejo General del Instituto local, como lo ordena el artículo 277 del Código electoral local.

Razones por las cuales no asiste la razón al agravio respectivo en tanto no da lugar a desvirtuar la tesis de que el promovente en representación de MORENA en el juicio de inconformidad no tenía la representación necesaria."

De lo trasunto, se colige de manera expresa el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que los representantes de los institutos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de México, no tiene facultad alguna para nombrar a sus representantes ante los órganos desconcentrados de la citada autoridad administrativa electoral, de ahí que no sea dable tener por colmada la personería de **Patricia Vargas Martínez**, en tanto que el documento por medio del cual pretende acreditarla, se encuentra suscrito por **quien no cuenta con facultades estatutarias para llevar a cabo dicha designación**; por lo que la calidad con la que se ostenta la impetrante, no fue otorgada por el órgano partidario facultado para tales efectos, lo que trae como consecuencia en la especie, **que exista un vicio de origen en cuanto al otorgamiento de la personería a efecto de promover el juicio de mérito**, requisito *sine quanon* para el acceso a la justicia electoral en representación de un partido político.

Bajo esta línea argumentativa, se precisa que en el caso concreto la promovente en el presente juicio **Patricia Vargas Martínez**, se ostenta como representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 08, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, quien fue designada para tales efectos por el **representante propietario** de dicho instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, **quien no cuenta con facultades estatutarias para llevar a cabo dicha designación**.

En efecto, la calidad con la que se ostenta la impetrante, fue otorgada por el órgano partidario facultado para tales efectos, por



lo que en la especie, existe un vicio de origen en cuanto al otorgamiento de la legitimación a efecto de promover el juicio de mérito, por lo que no es dable tener por acreditada la personería de **Patricia Vargas Martínez**, requisito *sine quanon* para el acceso a la justicia electoral en representación del Partido de la Revolución Democrática.

Así, de acuerdo con el artículo 227, tercer párrafo del Código local, corresponde a los órganos directivos del partido realizar las sustituciones de los representantes partidarios ante los órganos colegiados del Instituto Electoral local y que de conformidad con los artículos 76 inciso k) y 103, inciso k) de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática quiénes tienen atribución para designar a los representantes de los órganos electorales son los Comités Ejecutivos Estatal y Nacional o Locales, de lo que se desprende que no tiene esta facultad el representante propietario del instituto político actor ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

De lo anterior, se colige que en el caso concreto la representación de dicho instituto político no se encuentra otorgada por el órgano partidista competente, son los facultados para tal efecto conforme a la norma estatutaria; de ahí que en el presente caso no sea dable reconocerle la personería a quien se ostenta como personero del justiciable. Lo anterior porque, Javier Rivera Escalona, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto local, no tenía facultades para nombrar a dicho representante.

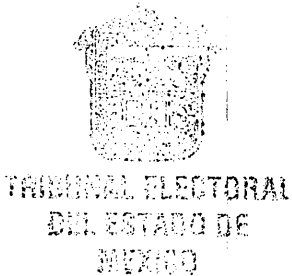
Como corolario a lo anterior, se destaca que en cuanto a la figura jurídica de la personería que ha sido analizada en párrafos precedentes, es inobjetable que el Código Electoral del Estado de México de manera precisa establece los parámetros para acreditar ésta por quien pretenda instar un medio de defensa en materia electoral, en representación de los partidos políticos; por

lo que la deficiencia de mérito es atribuible a la parte actora, ya que dicha carga procesal se considera indispensable para efectos de emitir una sentencia de fondo; lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 16/2005 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

Jurisprudencia 16/2005

IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES.- Las causas de **improcedencia** de los medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la **improcedencia** por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de **improcedencia**, consistente en el incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda.

Ahora, se impone precisar que con la anterior determinación no se trasgreden los artículos 1º y 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al derecho de acceso a la impartición de justicia, en razón de que, no se deben soslayar los presupuestos procesales establecidos en la legislación, para la procedencia de las vías jurisdiccionales que, en este caso, tienen los partidos políticos a su alcance, con el ánimo de dar efectividad



a tal derecho, pues de lo contrario equivaldría a que este Tribunal deje de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; además, se trastocaría las condiciones procesales de las partes en el juicio de mérito.

En efecto, con la presente determinación no se vulnera el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que se debe apuntar que éste es limitado, pues para que pueda ser ejercido, es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para este tipo de acciones, lo cual se insiste, brinda certeza jurídica.

Lo anterior, se sustenta en las jurisprudencias de rubros: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL"¹ y "ACCESO A LA JUSTICIA ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA"²

Así como en la jurisprudencia, IX.1c. J/4 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que señala:

TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. EL HECHO DE QUE SE APLIQUEN EN DETERMINADA INSTITUCIÓN JURÍDICA POR CONTEMPLAR UNA PROTECCIÓN MÁS BENÉFICA HACIA LAS PERSONAS, NO IMPLICA INOBSERVAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE LA REGULAN ESTABLECIDOS

¹ Época. Décima Época Registro: 2007621 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a./J. 98/2014 (10a.) Página: 909

² Época: Décima Época Registro: 2004823 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo Se Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (10a.) Página: 699



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

EN LA LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE. La reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus facultades de impartir justicia, pues opera en relación con los tratados internacionales de derechos humanos y con la interpretación más favorable a las personas y al orden constitucional. De ahí que, si dichos instrumentos internacionales se aplican en determinada institución jurídica por contemplar una protección más benéfica hacia las personas, ello no implica inobservar los presupuestos procesales que la regulan, establecidos en la legislación local aplicable.

Por último, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, el hecho de que la autoridad señalada como responsable al momento de rendir su informe circunstanciado, le reconoce al hoy actor su personería.

Sin embargo, como previamente se señaló, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de revisar que los promoventes de los medios de impugnación, como es el que nos ocupa, cumplan con los requisitos de procedibilidad establecidos en el Código comicial local.



De ahí que aun cuando existe un reconocimiento por parte de la responsable respecto del supuesto cumplimiento del requisito de personería, lo cierto es que al realizar la revisión de los requisitos de procedibilidad en el presente juicio de inconformidad, este Tribunal Electoral advirtió que el documento presentado por el hoy actor para acreditar la exigencia referida, no puede surtir sus efectos jurídicos como lo pretende el impetrante, en virtud de que la persona que otorgó la personería, no tenía facultades legales ni estatutarias para realizar la designación de la representación del partido político ante el órgano electoral desconcentrado.

En consecuencia, el reconocimiento o la aceptación que realizó la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, sobre la calidad del personero del partido político actor, no tiene eficacia jurídica, aunado a lo anterior, no obra en el expediente documento alguno en el cual conste que los órganos directivos partidistas facultados para nombrar a los representantes del partido ante

autoridades electorales hubiesen delegado tal facultad a **Javier Rivera Escalona**, representante propietario del partido actor ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México; tampoco existen constancias a través de las cuales dichos órganos directivos le hubiesen instruido a dicho representante que acreditara a **Patricia Vargas Martínez** como representante del partido ante la autoridad distrital responsable, o que comunicara a la autoridad administrativa electoral dicha designación.

En razón de todo lo anterior, y dado que el medio de impugnación no fue admitido, lo procedente es decretar su desechamiento de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 426, párrafo primero, fracción III del Código Electoral del Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO. Se **desecha de plano** el medio de impugnación, por las razones expuestas en el considerando segundo del presente fallo.



NOTIFÍQUESE a las partes en los términos de ley; al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por oficio, acompañando copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 428 y 429 del Código Electoral del Estado de México, y 61 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. Además fijese copia íntegra del presente fallo en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, hágase del conocimiento público en la página que tiene este órgano judicial en Internet.

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su oportunidad archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en sesión pública celebrada el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, aprobándose por **unanimidad** de votos de los Magistrados Jorge Arturo Sánchez Vázquez, Jorge E. Muciño Escalona, Hugo López Díaz, Rafael Gerardo García Ruíz y Crescencio Valencia Juárez. Siendo ponente el último de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

DR. EN D. JORGE ARTURO SÁNCHEZ VÁZQUEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. EN D. JORGE E. MUCIÑO ESCALONA
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

M. EN D. HUGO LOPEZ DÍAZ.
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

LIC. RAFAEL GERARDO GARCÍA RUÍZ
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

DR. EN D. CRESCENCIO VALENCIA JUÁREZ
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

LIC. EN D. JOSÉ ANTONIO VALADEZ MARTÍN
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO